

# La economía política de la aplicación de las leyes de inmigración por autoridades estatales y municipales en Estados Unidos

Dennis Bixler-Márquez\*

Este artículo ofrece información sobre los procesos complejos que en Estados Unidos de América se llevan a cabo en torno a la migración. Las enormes tensiones que el proceso migratorio ha provocado en ese país han involucrado a las comunidades, las organizaciones civiles de todo tipo, las autoridades, los partidos políticos, y han conllevado muchos aspectos: desde la lucha por recursos para combatir la migración, el impulso a leyes para criminalizar la presencia de migrantes en los diversos estados de la Unión Americana, hasta la acción de las organizaciones anti-inmigrantes y pro-migrantes, y los intereses económicos que se benefician de la migración ilegal. Este artículo nos ilustra sobre los complejos procesos que al respecto se llevan a cabo en ese país, de los cuales muchas veces sólo alcanzamos a conocer sus manifestaciones más superficiales. Escrito antes de la era Obama, todavía bajo el gobierno de Bush, resulta, sin embargo, premonitorio en más de un sentido e ilustra tendencias de los procesos apuntados.

La competencia en Estados Unidos por recursos financieros ligados a la seguridad nacional entre diferentes regiones, entidades, burocracias y niveles de protección, cobró gran auge después del 11-S (11 de septiembre del 2001). Inmediatamente se organizaron a nivel local y regional varias asociaciones cívicas y entidades gubernamentales locales para obtener patrocinio federal,

pues la seguridad nacional se maneja como una responsabilidad financiera exclusivamente del gobierno federal —aunque se reconoce y se espera la cooperación regional y local. Del 2001 al 2007, se perfilaron en la arena política la misión y objetivos operacionales de estas entidades locales como factores clave para la seguridad nacional, y se afirmó que debían ser también acreedoras de apoyo financiero federal.

Paralelamente, se reorganizaron varias corporaciones federales, como el servicio de inmigración, la aduana y la patrulla fronteriza, dentro de una

sola agencia de seguridad nacional. Esta medida tuvo como objetivo primordial prevenir otro ataque foráneo al país e infundir confianza sobre la seguridad nacional en el público. Y para lograrlo, con su fuerte presupuesto, la nueva superagencia aseguró que ejercería un control más eficaz sobre las vías de acceso a la nación.

En ese sentido, este trabajo aborda el tema de las tendencias políticas de la distribución presupuestal para incrementar la seguridad a nivel local, estatal y federal en Estados Unidos de Norteamérica.

\* Profesor-Investigador de la Universidad de Texas en El Paso, EU. Director del Centro de Estudios Chicanos de la misma universidad.

## Antecedentes de apoyo federal financiero para la seguridad nacional

Las medidas de seguridad más sobresalientes en el periodo 2001-2007 fueron el aumento de agentes federales, de tecnología de revisión comercial de punta y del presupuesto asignado para infraestructura y operaciones en la frontera de Estados Unidos de Norteamérica con México<sup>1</sup>. La cooperación binacional rindió resultados con la conceptualización inicial de la “frontera inteligente” en 2002, por medio de un acuerdo entre ambas naciones. La zona fronteriza obtuvo apoyo y presupuestos federales que anteriormente se habían pedido para agilizar el tráfico comercial, vehicular y humano en la frontera, pero que habían sido ignorados por el Congreso estadounidense, hasta no plantearse éstos con la conveniente etiqueta de seguridad nacional<sup>2</sup>.

Entidades locales en diversas partes de la nación, con interés directo sobre la cuestión de seguridad nacional y la política migratoria, así como varios niveles de gobernanación, compitieron durante ese periodo por recursos financieros. Grupos con responsabilidad de reacción primaria de emergencia, como los bomberos, personal médico, policías urbanos, rurales y estatales, trabajadores sociales y epidemiólogos, se quejaron de no recibir el apoyo necesario para poder afrontar una calamidad en sus comunidades, como la que sufrió Nueva York. El presupuesto federal, un compromiso político entre localidades, estados y regiones, resultó en inequidades que generaron fricción geográfica. Recibieron apoyo financiero algunas regiones y comunidades, proporcionalmente superior al de las zonas urbanas, y otras regiones consideradas más vulnerables a un ataque por su densidad de población o importancia estratégica.

Al mismo tiempo que clamaron por mejor apoyo grupos y regiones vulnerables, aumentó el sentimiento nacional a favor de mayor control federal de las fronteras, pues su porosidad se evaluó como una amenaza a toda la nación. La encuesta nacional que condujo la Universidad de Quinnipiac

<sup>1</sup> Bixler-Márquez, Dennis J., “Binational Cooperation: Homeland Security and the Politics of Transportation and Commerce”, *Hemisphere*, vol. 14, (N), otoño, 2004, pp. 28-31.

<sup>2</sup> Bixler-Márquez, Dennis J., “La Preparatoria Bowie versus la Patrulla Fronteriza”, *AZTLAN: A Journal of Chicano Studies*, vol. 30, (2), 2005, pp. 157-168.

en febrero del 2006, reveló una gran preocupación del público estadounidense por la presencia del indocumentado y la fuerte oposición a su legalización<sup>3</sup>. En particular, se dialogó por medio de artículos y editoriales esta problemática: si a pesar de la creación de una mejor superagencia de seguridad nacional el flujo de indocumentados por la frontera sur persiste, la vulnerabilidad de la nación a una infiltración terrorista no ha disminuido. Protagonistas de esta percepción como Malkin, en su libro *Invasión*, y algunos medios televisivos alimentaron la imagen de la frontera sur como un corredor abierto a la penetración terrorista<sup>4</sup>.

La histeria anti-inmigrante también fue amplificada con la cobertura de conflictos en algunas comunidades, sobre la presencia creciente de inmigrantes en el sureste y noreste, nuevos destinos para al inmigrante de origen latinoamericano<sup>5</sup>.

## Tendencias políticas del patrocinio federal

La primera tendencia concierne a la actividad política en comunidades que recientemente han registrado un rápido crecimiento de inmigrantes, particularmente de México y otros países latinoamericanos. Varias de estas comunidades han sido perfiladas prominentemente por la prensa y la televisión como afectadas por indocumentados en su orden social, habitacional, ocupacional, cultural, etc. Los ensayos en *Time* sobre inmigrantes de Morelia, México, que residen en el afluyente suburbio de Nueva York, Los Hampton, ejemplifican el interés nacional de la prensa por el tema<sup>6</sup>.

En varias de las zonas más afectadas, los dirigentes electos como presidentes municipales, alcaldes, congresistas estatales y federales, son presionados por diferentes grupos y organizaciones para que frenen el flujo de inmigrantes. Las entidades gubernamentales de estas zonas

<sup>3</sup> Associated Press, “Encuesta: Inmigración ilegal, preocupación generalizada en EEUU”, marzo 4, 2006, pp. 1-2, <[http://hosted.ap.org/dynamics/stories/A/AMN\\_GEN EEUU\\_INMIGRACION\\_SONDEO\\_SPUS-?SITE=HOY](http://hosted.ap.org/dynamics/stories/A/AMN_GEN EEUU_INMIGRACION_SONDEO_SPUS-?SITE=HOY)>, consulta 3/6/2006.

<sup>4</sup> Malkin, Michelle, *Invasion: How America Still Welcomes Terrorists, Criminals and Other Foreign Menaces to our Shores*, Washington, D.C., Regnery Publishing, 2002.

<sup>5</sup> Marek, Angie C., “Not in the Mood for Guests”, *U.S. News & World Report*, diciembre 6, 2004, p. 30.

<sup>6</sup> Thornburgh, Nathan, “Inside the Life of the Migrants Next Door”, *Time*, febrero 6, 2005, pp. 34-45.

no han logrado obtener el respaldo del gobierno federal, cuyas agencias ignoran los llamados de la ciudadanía y los de sus líderes para resolver la situación. Washington-Valdez dio a conocer cómo la Coalición de Municipios Fronterizos, encabezada por la dirigente del condado de El Paso, presentó al Club Nacional de Prensa en Washington los resultados de un estudio que detalla el impacto de la inmigración en toda la frontera con México. Recalca ella que si “Washington no viene a la frontera, llevaremos la frontera a Washington”<sup>7</sup>.

En el noreste del país, Vitello reveló que los dirigentes locales formaron la Coalición de Alcaldes y Ejecutivos Municipales para la Reforma Migratoria<sup>8</sup>. Grupos como estas asociaciones abogan en varias partes de la nación por limitar legalmente al indocumentado el acceso a servicios sociales, médicos, educativos, bancarios, etc. Estatutos locales de esa índole chocan con leyes y decisiones jurídicas federales. Estas medidas son resistidas por grupos de presión como corporaciones industriales y comerciales que se benefician de la presencia del indocumentado, así como por coaliciones de grupos pro-derechos civiles que tradicionalmente apoyan la presencia del inmigrante<sup>9</sup>.

Las asociaciones que representan grandes intereses comerciales a nivel nacional promueven en el Congreso y con el poder ejecutivo programas de amnistía y legalización a varios niveles. Argumentan sus voceros que la mano de obra indocumentada es esencial para la economía estadounidense, pero es rechazada esa aserción por poderosos intereses en la nación. Mack reveló que en el mismo Partido Republicano emerge la inmigración del indocumentado como primer asunto de importancia doméstica, y que rechaza la membresía al liderazgo del partido. Esta polarización de grupos con intereses divergentes sobre la inmigración brota a la superficie en varias arenas del ámbito político estadounidense<sup>10</sup>.

Un número importante de políticos en localidades que tienen que contender para ser reelegidos próximamente, así como sus contrincantes, han comunicado al votante que si las agencias federales no responden adecuadamente a las necesidades de las comunidades, estas últimas deben de tomar cartas directamente en el asunto. Como resultado, han autorizado o están en vías de autorizar a sus cuerpos policíacos arrestar al indocumentado para ser procesado por el nuevo servicio de inmigración y aduanas, “ICE”, por sus siglas en inglés. Además, aseguran que desplegarán esos y otros elementos para disuadir y negar el acceso a servicios públicos, como en el estado de Georgia<sup>11</sup>.

Cauchon reportó que aproximadamente 12 estados ya contemplan sanciones para el que emplee al indocumentado<sup>12</sup>. Singer, investigadora del Instituto Brookings, detalló que para mediados del 2007, todos los estados contemplan promulgar más de 1,100 leyes que restringen la presencia del inmigrante indocumentado<sup>13</sup>.

Esta cifra ha aumentado rápidamente con la proliferación de medidas similares en varios municipios del país. De esta manera, líderes locales y estatales buscan postularse públicamente como guardianes de la seguridad nacional en el muy descuidado nivel primario. También exploran avenidas para transferir el costo de esta nueva dimensión operacional al gobierno federal. Esto ha creado un conflicto de jurisdicción con el gobierno federal, pero este último también asumió, ostensiblemente, una posición un poco más conciliatoria hacia los municipios, suburbios, etc., anticipando un desborde de la ira de constituyentes durante elecciones nacionales.

La segunda tendencia presupuestal proyecta un movimiento de recursos hacia entidades en la franja fronteriza como resultado de la presión nacional y gestoría por parte de las comunidades en la frontera a varios niveles. Los estados fronterizos estadounidenses, con sus asociaciones de congresistas federales, gobernadores, cámaras

<sup>7</sup> Washington-Valdez, Diana, “Study will Show how Federal Policies affect U.S. Border”, *El Paso Times*, marzo 8, 2006, p. 1-A.

<sup>8</sup> Vitello, Paul, “Localities seek help on Immigration”, *The New York Times*, marzo 7, 2006, p. A-21.

<sup>9</sup> Aizenman, N. C., “Immigration Debate wakes a ‘Sleeping Latino Giant’”, *Washingtonpost.com*, abril 6, 2006, pp. 1-3, <<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/04/05/AR2006040502543.html>>.

<sup>10</sup> Mack, Kristen, “Border Security hot Topic in District 7: GOP Primary Candidates do not agree on how to solve the Issue of Illegal Immigration”, *Houston Chronicle*, marzo 6, 2006, pp. 1-3.

<sup>11</sup> Downes, Lawrence, “In Immigrant Georgia, New Echoes of an Old History”, *The New York Times*, marzo 6, 2006, p. A-24.

<sup>12</sup> Cauchon, Dennis, “States weigh Immigration Controls”, *USA Today*, enero 26, 2006, p. 1-A.

<sup>13</sup> Singer, Audrey, “The Impact of Immigration on Status and Localities”. Presented before the Subcommittee on Immigration, Citizenship, Refugees, Border Security and International Law. House Judiciary Committee, U.S. House of Representatives, Washington, D.C., mayo 17, 2007, pp. 1-9.

de comercio y organizaciones de guardianes del orden, también han tratado de obtener una porción más grande del presupuesto federal para las dependencias que bregan de alguna manera con la inmigración y la presencia del indocumentado.

La presencia en la franja divisoria de los seudo milicianos del interior del país, comúnmente conocidos como “Minutemen”, atrajo mucho la atención en el 2005 y 2006 por parte de los medios de difusión masiva internacional, nacional y local. Su labor de vigilancia en apoyo de la Patrulla Fronteriza, según éstos, exacerba el conflicto presupuestal, ya que los “Minutemen” proclaman que la Patrulla Fronteriza no puede cumplir con su cometido y que las fuerzas policiales de las localidades fronterizas agradecen en privado su labor. Argumentan adicionalmente que el flujo de indocumentados disminuye por su presencia. La controvertida presencia de los “Minutemen” ha resultado en mítines y marchas por los elementos de la ciudadanía que los rechaza, pero también en apoyo por parte de algunos sectores de la población estadounidense, la cual incluso les provee algunos adherentes locales en la frontera.

Ante la crisis nacional generada por los “Minutemen”, la cual han aprovechado agrupaciones ‘pro defensa de la frontera’ y otras de carácter anti-inmigrante, los dirigentes de los estados fronterizos reaccionaron con medidas financieras y una política de preservación personal. Los gobernadores de California y Arizona declararon primero, y los de Nuevo México y Texas después, un estado de emergencia en sus jurisdicciones, ante la incapacidad de las agencias federales de bregar con el flujo de indocumentados, el contrabando de estupefacientes y la violencia que lo acompaña en la frontera. Cabe señalar que el narcotráfico es identificado como el peligro máximo para la seguridad nacional por el Departamento de Seguridad Nacional, al formarse inicialmente esta dependencia; pero el narcotráfico, como amenaza a la nación, se rezaga en importancia en la política nacional, ante las exigencias de contener primero una infiltración terrorista. El gobernador de Texas, siendo el último en sumarse a esta tendencia, también ha asignado fondos estatales y promueve el uso de fuerzas policiales del estado en la protección de la frontera.

Ninguno de los gobernadores fronterizos quiere ser percibido como líder ineficaz en la lucha por la seguridad de su estado. Reiteran que defenderán a sus estados de

la amenaza que proviene de la frontera sur, asignando los recursos necesarios para lograrlo. También iniciaron y prometieron obtener mayor cooperación del gobierno mexicano y de sus estados fronterizos para, juntos, intensificar el control de la frontera. Asimismo, se han realizado giras de congresistas estadounidenses, como la que organizó el representante Kolbe de Arizona con su vecino estado de Sonora en marzo del 2006<sup>14</sup>.

También han recorrido la frontera representantes federales de las dos naciones, como el secretario de Seguridad Nacional, Chertoff, y sus contrapartes en México, firmando acuerdos de cooperación para mejorar la seguridad fronteriza y demostrar que ambos gobiernos federales tienen el control de la situación<sup>15</sup>. Sin embargo, estas giras, acuerdos y discursos no han convencido a los políticos o al público en la frontera, y menos a los grupos anti-inmigrantes.

La violencia general en la zona fronteriza, los ataques a agentes de la Patrulla Fronteriza y el controvertido incidente del supuesto apoyo al narcotráfico por parte de fuerzas federales mexicanas en el Condado de Hudspeth, cerca de El Paso, Texas, motivó a la organización de alguaciles de los municipios fronterizos, y a otras fuerzas policiales fronterizas, a promover su causa a nivel nacional<sup>16</sup>. Los alguaciles, quienes son oficiales electos, han comentado públicamente que la ciudadanía bajo su protección vive en un estado de amago e incertidumbre debido a la desviación del narcotráfico y el flujo de indocumentados por sus municipios, particularmente en áreas de escasa población.

Al no tomarse como verosímil su versión del incidente por agencias federales, los agentes del Condado de Hudspeth lograron acceso a un comité del congreso federal. Acompañados de sus homólogos de Texas, Arizona y Nuevo México, comparecieron ante las cámaras de las redes de televisión, radio y representantes de la prensa. Describieron gráficamente una zona porosa y caótica, apoyando sus

<sup>14</sup> Madden, Mike, “Senators to hear of Violence on the Border”, *The Arizona Republic*, marzo 1, 2006, pp. 1-2, <<http://www.azcentral.com/arizonarepublic/new/articles/0301border-violence0301.html>>.

<sup>15</sup> Bogan, Jesse & Contreras, Guillermo, “Border won't be such a Boundary to anti-crime Action”, *MySA.com*, marzo 4, 2006, pp. 1-2, <<http://www.sananton.com/global-includes/printstory.jsp?path=/news/mexico/storiesMYS030406.01A>>. Consulta 2006.

<sup>16</sup> Rentería, Ramón, “Cruce peligroso: los traficantes se creen dueños del río”, *El Paso y Más*, enero 28 a febrero 3, 2006, pp. 1-2 A.

palabras con videos sobre violaciones territoriales a la soberanía nacional. Recomendaron un mayor apoyo para las fuerzas del orden municipales de la frontera. Propusieron, con astucia, formar una segunda línea de seguridad nacional en la frontera y la nación, buscando complementar, no competir, con la Patrulla Fronteriza<sup>17</sup>. En Texas, candidatos a puestos políticos secundaron esa postura y recomendaron además que el estado desempeñara un papel central en la defensa de la frontera<sup>18</sup>.

## Tendencias futuras

Se prevé que varias comunidades con inmigrantes indocumentados seguirán tratando de responder a la presión política de sus ciudadanos para combatir la presencia del inmigrante en general, al mismo tiempo que tratarán de contender con los intereses económicos que se benefician de la mano de obra del inmigrante. Asimismo, se continuará sintiendo el peso de los grupos que defienden los derechos del indocumentado y comunidades bajo el amago de diversas autoridades.

El vacío político creado por la derrota en el 2007 de la legislación federal sobre inmigración conllevará a un aumento de nuevas medidas legislativas de menor amplitud. A nivel federal, se buscará implementar una legislación enfocada a grupos específicos, como el recién rechazado "Dream Act", el cual afecta la permanencia legal de estudiantes indocumentados<sup>19</sup>, y la legislación "Agjobs", que se enfoca en el sector agrícola<sup>20</sup>. La estrategia de realizar gradualmente en sectores individuales lo que no se logró con la derrotada ley de reforma migratoria, no parece contar con suficiente apoyo bipartita en el congreso. A nivel estatal sobresale la plena retirada política del gobernador de Nueva York de su propia iniciativa para otorgar licencias de conducir a los indocumentados. Iniciativas legislativas como éstas están siendo derrotadas por el temor de los

políticos de ser desalojados de sus puestos y ver a sus partidos perder la presidencia y otros puestos legislativos importantes. A pesar de algunas encuestas nacionales que revelan un apoyo mayoritario (cerca de dos tercios) de la población estadounidense a una nueva ley de inmigración que incluya una vía para legalizar a la población indocumentada, la eficaz aplicación de las leyes migratorias y una fuerte seguridad fronteriza, ambos partidos políticos se encuentran en una posición difícil y ambigua al aproximarse los próximos comicios presidenciales. Prefieren postergar la reforma migratoria.

El gobierno federal se propone resolver la crisis nacional de credibilidad que ocasiona la porosidad fronteriza antes de impulsar nuevas medidas legislativas. Consecuentemente, como reporta Aizenman, la administración de George Bush aplicará 26 medidas para disminuir el flujo de indocumentados, detectar su presencia y deportarles, pues estas medidas son factibles dentro de las leyes de inmigración vigentes; no requieren nueva legislación, sólo aprobación del poder ejecutivo federal<sup>21</sup>.

Constituyen esas medidas una aplicación severa, de gran alcance y con características punitivas, tanto para el indocumentado como para aquellos que lo empleen o faciliten su presencia en la nación. Estas medidas, revela Tangeman *et al.*, en el plan estratégico *ENDGAME* del Departamento de Seguridad Nacional, concuerdan con la estrategia de diez años (2003-2012) para la detención y desalojo de indocumentados para alcanzar un alto nivel de seguridad nacional. Estas medidas federales y locales incluyen redadas, retenes policiales en la vía pública, etc., y ya están haciendo mella en el flujo migratorio y la población indocumentada<sup>22</sup>.

La operación "Stone Garden" en el sur de Nuevo México es representativa de las operaciones llevadas a cabo en el 2007 por autoridades locales<sup>23</sup>. La ciudadanía afectada por estas drásticas medidas ha señalado que operativos policíacos locales y regionales amagan al público de origen

<sup>17</sup> Hernández, Michael, "Sheriffs to go before Congress: More leaders will testify about Border Violence", *El Paso Times*, febrero 26, 2006, p. 1-C.

<sup>18</sup> Grissom, Brandi, "Securing the Border: Candidates say State must take Bigger Role", *El Paso Times*, marzo 6, 2006, pp. 1-2 A.

<sup>19</sup> Dinan, Stephen, "Student Illegals Bill Dropped", *The Washington Times*, septiembre 27, 2007, pp. 1-2.

<sup>20</sup> Sands Orchowski, Peggy, "Immigration-Whack-a-Mole on the Hill Kills DREAM Act, Agjobs Hill", *Hispanic Outlook*, diciembre 17, 2007, p. 17.

<sup>21</sup> Aizenman, N.C., "Bush moves to step up Immigration Enforcement", *Washingtonpost.com*, agosto 11, 2007, pp. 1-3, <<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/08/10/AR2007081001113.html>>.

<sup>22</sup> Tangeman, A.S. *et al.*, *ENDGAME Office of Detention and Removal Strategic Plan, 2003-2012: Detention and Removal Strategy for a Secure Homeland*, U.S., Department of Homeland Security, Bureau of Immigration and Customs Enforcement, Washington, D.C., 2003.

<sup>23</sup> Gilot, Louie, "Lawsuits claim Otero's 'Stonegarden' violated Civil Rights", *El Paso Times*, noviembre 12, 2007, p. 2-A.

mexicano, incluso en sus hogares, bajo el pretexto de leves violaciones a la ley, para lograr el arresto del indocumentado por parte de la Patrulla Fronteriza.

El estado de Texas ha propuesto para el 2008 requerir la participación de autoridades estatales y locales en la aplicación de las leyes de inmigración. Arizona, que cuenta con fuerte apoyo del municipio de Maricopa y la ciudad de Phoenix, se perfila para el 2008 como la entidad que aplicará las sanciones más severas a los violadores de su legislación. El senador Jim Webb de Virginia afirmó, en vísperas del 2008, que si las localidades pueden erigir santuarios para el indocumentado, también pueden restringir su presencia<sup>24</sup>.

También se prevé la continuación de conflictos entre entidades locales, leyes federales y organizaciones cívicas y humanitarias. Por ejemplo, la Iglesia Católica afirma que no acatará leyes como las que se proponen en el Congreso, aunque se criminalicen sus iniciativas caritativas hacia el inmigrante<sup>25</sup>. Ciudades como San Francisco y New Haven se han declarado a favor de otorgar identificación legal al indocumentado, mientras que otras comunidades se oponen a esa política. Indudablemente la legalidad constitucional de nuevas leyes estatales, locales y federales también será litigada y ocasionará un distanciamiento político en la sociedad civil.

Se anticipa también que los municipios fronterizos recibirán mejor apoyo federal y estatal para sus operaciones regionales, posicionándose éstas dentro del escalafón de protección de la frontera y la nación, en el segundo peldaño. Propone ya el senador Cornyn, de Texas, apoyo fiscal con el presupuesto federal de seguridad nacional<sup>26</sup>. Esta política evita conflictos con las agencias de seguridad nacional, al volverse las corporaciones policiales municipales en fuerzas de apoyo secundario. Se prevé también la atractiva oferta de incentivos federales a la gendarmería de varias regiones a cambio de conducir redadas y

medidas similares. Esta participación rinde una ganancia monetaria a la corporación que acepta el patrocinio y directamente a sus agentes por laborar tiempo extra. De esta manera, el gobierno federal mantendrá el control operativo y las riendas fiscales de la aplicación de las leyes de inmigración.

Sin embargo, no todas las corporaciones de seguridad, locales y regionales, están de acuerdo. Algunas de éstas se oponen a desempeñar un papel en la aplicación de las leyes federales que atan la seguridad nacional con la inmigración al criminalizar al indocumentado. Larry Dever, alguacil del municipio fronterizo de Cochise, en Arizona, expresó su inconformidad con tener que tornarse en agente de la Patrulla Fronteriza<sup>27</sup>. Dirigentes, como el jefe de la Policía en El Paso, Texas, manifiestan ya su oposición por el daño que causan estas medidas a la comunidad, su verdadero costo monetario y político, así como por el efecto negativo a largo plazo en la verdadera lucha contra el elemento criminal en sus jurisdicciones<sup>28</sup>.

La relación entre Estados Unidos y México, como indicó el senador estadounidense Dodd en la 45 Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, se encuentra "migratizada"<sup>29</sup>.

El gobierno americano y el mexicano han tratado, desde el 2001, de resolver sin éxito la crisis de inmigración. Aunque se inicia la creación de una frontera "inteligente", dentro de un marco de seguridad binacional y con un proyectado alcance hemisférico, la incapacidad del congreso estadounidense de reformar la política migratoria seguirá ocasionando conflictos de jurisdicción y financiamiento sobre la aplicación de leyes federales. La cuestión del impacto local y regional de la inmigración cobrará más vigor en la política estadounidense y tendrá que ser resuelta antes de que se puedan legislar reformas a las leyes de inmigración.

<sup>24</sup> McLaughlin, Seth, web: "Illegals broad sigue", *Washington Times*, diciembre 21, 2007, pp. 1-2, <<http://www.washingtontimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071221/METRO/437437>>. Consulta 12/22/07.

<sup>25</sup> Rico, Yurina, "Iglesias protegerán a inmigrantes", *La Opinión Digital*, marzo 2, 2006, pp. 1-2, <<http://www.laopinion.com/print.html?rkey=00060301172410489460>>.

<sup>26</sup> Gilot, Louie, "Hill Funds Border Sheriffs", *El Paso Times*, marzo 11, 2006, p. 1-B.

<sup>27</sup> Associated Press, "Se resisten policías a realizar tareas de inmigración", *El Diario de El Paso*, mayo 5, 2007, p. 1-A.

<sup>28</sup> Wiles, Richard, "Panel on National Security, Community, Security & Local Law Enforcement/Immigration Enforcement, Building a Vision of the Border: A Conference on Border Policy. U.S. Mexico Border and Immigration Task Force and the Border Human Rights Collaborative", *El Paso, Texas*, noviembre 28-29, 2007.

<sup>29</sup> Franco, Luciano, "La relación entre ambas naciones se encuentra 'migratizada', aseguran", *La Crónica de Hoy*, marzo 5, 2006, p. 1-3, <<http://www.cronica.com.mx/nota.php?idc=229439>>.